



Asamblea General

Sexagésimo sexto período de sesiones

Documentos Oficiales

Distr. general
27 de diciembre de 2011
Español
Original: inglés

Sexta Comisión

Acta resumida de la quinta sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el miércoles 5 de octubre de 2011, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Salinas Burgos (Chile)

Sumario

Tema 83 del programa: El estado de derecho en los planos nacional e internacional

La presente acta está sujeta a correcciones. Dichas correcciones deberán enviarse, con la firma de un miembro de la delegación interesada y *dentro del plazo de una semana a contar de la fecha de publicación*, al Jefe de la Sección de Edición de Documentos Oficiales, oficina DC2-750, 2 United Nations Plaza, e incorporarse en un ejemplar del acta.

Las correcciones se publicarán después de la clausura del período de sesiones, en un documento separado para cada Comisión.

11-53216 (S)



Se ruega reciclar

Se declara abierta la sesión a las 10:10 horas.

Tema 83 del programa: El estado de derecho en los planos nacional e internacional (A/66/133)

1. **La Vicesecretaria General**, al presentar el informe del Secretario General (A/66/133), dice que los acontecimientos recientes, especialmente los sucedidos en el Norte de África y el Oriente Medio, son un recordatorio de que la búsqueda de un “gobierno de las leyes y no de los hombres” es universal. El pueblo exige a sus gobiernos cada vez más transparencia y respeto por la justicia, los derechos humanos y el estado de derecho. Los gobiernos recién constituidos están solicitando la ayuda de las Naciones Unidas para redactar sus constituciones, reformar las instituciones de justicia y seguridad, y ocuparse del legado de las atrocidades del pasado.

2. El compromiso de larga data de la Sexta Comisión ha sido crucial para mantener la atención internacional sobre el estado de derecho en los planos nacional e internacional. Con su apoyo, las Naciones Unidas están perfeccionando su comprensión del estado de derecho y de la asistencia que aporta a los Estados Miembros. El informe anual del Secretario General sobre el fortalecimiento y la coordinación de las actividades de las Naciones Unidas orientadas a la promoción del estado de derecho (A/66/133) facilitó un panorama de los amplios esfuerzos realizados por la Organización. Las actividades de las Naciones Unidas en el plano internacional se basan en el reconocimiento de que un sistema multilateral eficaz que se atenga al derecho internacional es esencial para hacer frente a los problemas y las amenazas mundiales. El principio de que todas las personas y entidades (incluidos los Estados) han de rendir cuentas ante la ley impulsa las actividades de la Organización. Por tanto, la resolución imparcial es crucial.

3. El informe recoge numerosas actividades que pueden reforzar la rendición de cuentas y el arreglo pacífico de controversias. Se recibe con agrado y se debe alentar la tendencia hacia una mayor utilización de mecanismos basados en tratados, en particular la Corte Internacional de Justicia. Con el debate sobre el subtema dedicado al estado de derecho y la justicia de transición en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos, en el informe se resalta la labor de los tribunales penales internacionales e híbridos creados

para el enjuiciamiento de los responsables de perpetrar las peores atrocidades de las pasadas décadas.

4. La Organización también se esfuerza por fortalecer el sistema de justicia penal internacional basado en el Estatuto de Roma y está formulando un enfoque coherente para prestar asistencia a los Estados Miembros en el cumplimiento de su responsabilidad primaria de investigar y someter a juicio a los perpetradores de graves crímenes internacionales. Esa asistencia puede abarcar desde el apoyo para técnicas de investigación complejas hasta la creación de organismos para la protección de los testigos.

5. Las Naciones Unidas también desean continuar prestando apoyo a otros mecanismos diversos de justicia de transición. Tan solo en 2011, se han enviado comisiones de investigación a Libia, Côte d'Ivoire y Siria. La nota de orientación del Secretario General sobre el enfoque de las Naciones Unidas respecto de la asistencia para la promoción del estado de derecho ayudó a perfeccionar la labor de la Organización. Dado que en 2011 se celebra el cincuentenario de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, el Secretario General también ha emitido una nota de orientación para sensibilizar sobre el problema permanente de la apatridia.

6. Desde la Cumbre Mundial 2005, las Naciones Unidas han logrado avances considerables hacia una mayor coherencia y coordinación de sus actividades orientadas a la promoción del estado de derecho. Los arreglos institucionales, como el establecimiento del Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho, que preside la Vicesecretaria General, han ayudado a la Organización a desarrollar un marco normativo más claro elaborando enfoques conjuntos sobre cuestiones intersectoriales cruciales, como la justicia de transición, la redacción de proyectos de constitución y la apatridia. Recientemente el Grupo puso a prueba el programa de capacitación unificada de las Naciones Unidas sobre el estado de derecho, que asegurará que todos los funcionarios comprendan el enfoque unificado de la Organización sobre el estado de derecho y ayuden a velar por un apoyo coordinado de las Naciones Unidas.

7. Las Naciones Unidas suministran asistencia para la promoción del estado de derecho a más de 150 Estados Miembros en todos los contextos, desde el desarrollo y la fragilidad hasta el conflicto y la consolidación de la paz, incluidas 17 operaciones de

paz con mandatos relacionados con el estado de derecho. En aproximadamente 70 países, al menos tres entidades de las Naciones Unidas realizan actividades relacionadas con el estado de derecho, y cinco o más entidades lo hacen en más de 35 países.

8. Entidades operacionales clave de las Naciones Unidas realizan un número cada vez mayor de iniciativas conjuntas y amplias, en particular en contextos que sufren o han sufrido conflictos. Por ejemplo, las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en los países y las misiones de mantenimiento de la paz han ampliado su programación conjunta con nuevas iniciativas en Haití, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y el Chad. En Burundi se reforzaron los efectos y la coherencia mediante la integración del personal de tres entidades distintas de las Naciones Unidas en una dependencia conjunta para la justicia, en un solo programa de derechos humanos y justicia. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU-Mujeres han continuado su experimento de programación conjunta en el acceso de las mujeres a la justicia en situaciones posteriores a conflictos en Colombia, Nepal y Uganda, en estrecha colaboración con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en cuestiones de género y resarcimiento.

9. La Organización está comprometida con la ampliación del uso de la programación conjunta en las operaciones de mantenimiento de la paz y las misiones políticas especiales, y con la mejora de la colaboración entre sus entidades presentes en contextos distintos de las misiones. Sin embargo, a fin de profundizar en la cooperación será preciso superar obstáculos institucionales y crear incentivos para la programación conjunta a nivel de todo el sistema. Además, las Naciones Unidas necesitan mejorar la evaluación de los efectos de sus esfuerzos reforzando su capacidad de supervisión.

10. Las actividades políticas son cruciales para el éxito de la reforma del estado de derecho. La relativa ausencia de partes interesadas nacionales y de experiencias de base en los debates normativos de alto nivel sobre el estado de derecho se han opuesto al progreso en ese ámbito. Teniendo presente este aspecto, el informe titulado “New Voices: National Perspectives on Rule of Law Assistance”, elaborado por la Dependencia sobre el Estado de Derecho en cooperación con expertos nacionales de distintos países, entidades de las Naciones Unidas y asociados

para el desarrollo, se preparó para garantizar que las opiniones nacionales se escucharan sistemáticamente y se situaran en la base de las actividades de promoción del estado de derecho.

11. El entorno externo continúa fragmentado. Las Naciones Unidas solamente ofrecieron una pequeña proporción de la asistencia mundial a la promoción del estado de derecho, siendo bilateral la mayor parte el apoyo prestado. La ineficiencia de prestar apoyo a los Estados con numerosos programas de asistencia, conflictivos en ocasiones, se ha demostrado una y otra vez. Por tanto, se debe hacer todo lo posible por adoptar enfoques más uniformes y conjuntos que permitan mejorar la coherencia y reducir la carga para los Estados receptores. Es crucial hablar de manera unánime para que la Organización preste asistencia a los dirigentes nacionales en reformas institucionales difíciles.

12. Por último, la oradora agradece a los Estados Miembros su apoyo continuo y aguarda con interés la reunión de alto nivel sobre la promoción del estado de derecho con la que se inaugurará el sexagésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General.

13. **El Sr. Baghaei Hamaneh** (República Islámica del Irán), hablando en nombre del Movimiento de los Países No Alineados, dice que es crucial mantener un equilibrio entre las dimensiones nacional e internacional del estado de derecho. Con objeto de velar por que las relaciones internacionales estén basadas en el estado de derecho, todos los Estados deben tener la oportunidad de participar en los procesos de elaboración de legislación internacional y han de cumplir sus obligaciones contraídas tanto con arreglo a tratados como en virtud del derecho internacional consuetudinario. Es imperativo evitar la aplicación selectiva del derecho internacional y hay que respetar los derechos legítimos y legales de los Estados con arreglo a la legislación internacional.

14. La piedra angular del estado de derecho en el plano internacional es el principio de prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y el arreglo pacífico de controversias. Por tanto, se debe alentar el uso por los Estados de mecanismos establecidos en virtud del derecho internacional para el arreglo pacífico de las controversias como la Corte Internacional de Justicia, los tribunales creados en virtud de tratados como el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, y el arbitraje. Los miembros del Movimiento instan a la

Asamblea General y al Consejo de Seguridad a que hagan uso, cuando corresponda, de su derecho consagrado en el Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas a solicitar a la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica.

15. Todos los Estados deben cumplir su obligación de promover la observancia y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de conformidad con el derecho internacional. Los propósitos y principios de la Carta y los principios del derecho internacional son fundamentales para alcanzar la paz y la seguridad, el estado de derecho, el desarrollo económico y el progreso social, y el respeto de los derechos humanos. El Movimiento de los Países No Alineados sigue preocupado por el uso de medidas unilaterales, debido a las repercusiones negativas que estas tienen en el estado de derecho y las relaciones internacionales.

16. Los Estados Miembros deben respetar totalmente las funciones y atribuciones de cada uno de los órganos principales de las Naciones Unidas, especialmente la Asamblea General, y se ha de mantener un equilibrio entre ellos. La cooperación y coordinación estrechas entre todos los órganos principales es esencial. A los miembros del Movimiento les sigue preocupando que el Consejo de Seguridad interfiera en las funciones y atribuciones de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social ocupándose de asuntos que son de la competencia de esos dos órganos.

17. La Asamblea General debe desempeñar una función rectora en la promoción de iniciativas que aseguren el respeto del estado de derecho. No obstante, la comunidad internacional no debe suplantar a las autoridades nacionales en su tarea de establecer o fortalecer el estado de derecho. Debe prestarse asistencia y cooperación a petición de los gobiernos y estrictamente en el marco de los respectivos mandatos de los fondos y programas de las Naciones Unidas. Las costumbres y características políticas y socioeconómicas de cada país deben tomarse en consideración, y debe evitarse la imposición de modelos preestablecidos. Han de establecerse mecanismos apropiados para que los Estados Miembros puedan mantenerse al corriente de la labor de la Dependencia sobre el Estado de Derecho y asegurar una interacción regular entre la Dependencia y la Asamblea General.

18. Por último, los Estados miembros del Movimiento de los Países No Alineados acogen con satisfacción el nuevo sistema de administración de justicia de las Naciones Unidas y apoyan las iniciativas para que el personal de las Naciones Unidas rinda cuentas por faltas de conducta cuando esté en misión. El Movimiento también condena todo intento por desestabilizar el orden democrático y constitucional de cualquiera de sus países miembros y está dispuesto a contribuir activamente en las deliberaciones sobre la propuesta de reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la promoción del estado de derecho en los planos nacional e internacional.

19. **La Sra. Robertson** (Australia), hablando en nombre del Canadá, Australia y Nueva Zelandia (CANZ), dice que los cambios políticos que están teniendo lugar en África del Norte y el Oriente Medio están creando situaciones complejas que requieren respuestas sofisticadas y multidimensionales, como la asistencia a la reforma política y del sector de la seguridad, la creación de capacidad en las instituciones gubernamentales y los mecanismos de justicia de transición. Los países del Grupo CANZ han estado prestando ese tipo de asistencia en sus regiones respectivas y el resto del mundo. Australia y Nueva Zelandia, junto con otras 13 naciones del Pacífico, han ejercido una función principal en la Misión Regional de Asistencia a las Islas Salomón, que ha ayudado a restaurar el orden público y fomentar la recuperación económica en ese país. El Canadá continúa prestando apoyo al Tribunal Especial para Sierra Leona e impartiendo capacitación a las fuerzas de seguridad y las instituciones judiciales con objeto de aumentar su comprensión de los principios de protección de la infancia y su competencia en casos de violencia sexual y por motivos de género, reclutamiento de niños soldado y violaciones de los derechos del niño.

20. En lo relativo a la justicia de transición, se necesitará hacer esfuerzos tanto nacionales como internacionales para restaurar el estado de derecho en sociedades en situación de conflicto o posterior a un conflicto, llevar a juicio a los culpables y ofrecer reparación para las víctimas. No se puede seguir un solo criterio para la justicia de transición porque cada situación es única. La justicia de transición puede impartirse con diversas medidas, como procedimientos penales, programas de resarcimiento, procesos de investigación de los hechos, tribunales híbridos o mixtos y comisiones de la verdad.

21. La oradora expresa la esperanza de que la comisión de reconciliación de Côte d'Ivoire ejerza una función fundamental para forjar la unidad y promover la reconciliación después del conflicto interno del país.

22. **El Sr. Errázuriz** (Chile), hablando en nombre del Grupo de Río, dice que el respeto absoluto de los derechos humanos y las libertades fundamentales se encuentra en el centro mismo del estado de derecho tanto en el plano nacional como en el internacional. El Grupo de Río agradece los esfuerzos del Secretario General para mejorar la coordinación y coherencia de los programas y actividades de las Naciones Unidas relacionados con la asistencia sobre el estado de derecho, como muestra la nota de orientación sobre la aproximación de las Naciones Unidas a ese tipo de asistencia. El marco del fortalecimiento del estado de derecho debería incluir elementos aplicables no solamente a sociedades en situaciones posteriores a conflictos, sino a todas las comunidades del mundo. Todas las acciones tomadas en ese marco deben regirse por valores acordados y por normas y principios creados mediante procesos predecibles y reconocidos.

23. El Grupo de Río recibe con agrado y apoya la opinión del Secretario General de que las perspectivas nacionales deben ser la base para la asistencia de las Naciones Unidas a la promoción del estado de derecho. Para lograr el éxito, cualquier programa dedicado al fortalecimiento del estado de derecho en el plano nacional requiere una comprensión profunda del contexto sociopolítico y las necesidades locales. Sin embargo, la "implicación local" no es un concepto evidente por sí mismo, sino que necesita ser clarificado en cada situación mediante asistencia técnica y de creación de capacidad. Las estructuras nacionales del estado de derecho deben estar bien cimentadas para que los países puedan cumplir sus obligaciones internacionales.

24. Los gobiernos del Grupo de Río reafirman su fuerte compromiso con la preservación de la institucionalidad democrática, el estado de derecho, el orden constitucional, la paz social y el irrestricto respeto a los derechos humanos.

25. El Grupo de Río da la bienvenida a la idea de estudiar alternativas para mejorar la coordinación y la promoción del diálogo y reitera su compromiso con el estado de derecho. A ese respecto, acoge con satisfacción la resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de nombrar un Relator Especial

para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, que ayudará a luchar contra la impunidad en el marco de las Naciones Unidas.

26. **El Sr. Le Hoai Trung** (Viet Nam), hablando en nombre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), dice que los esfuerzos internacionales por prestar asistencia en la promoción del estado de derecho han de basarse en los principios de implicación nacional, igualdad soberana de los Estados, arreglo pacífico de controversias, cumplimiento de un régimen basado en normas y respeto de la integridad territorial. Las Naciones Unidas, en coordinación con los donantes, asociados nacionales y otros organismos internacionales, deben ser el componente básico de una asistencia efectiva para la promoción del estado de derecho.

27. La Carta de la ASEAN reafirmó el compromiso de todos los Estados miembros de la Asociación con los principios del estado de derecho, la buena gobernanza, la democracia y el gobierno constitucional, y con el respeto de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Así, la ASEAN ha aprobado varios instrumentos jurídicos que abarcan aspectos como los privilegios y las inmunidades, los mecanismos de arreglo de controversias, las normas de autorización de transacciones legales en virtud de legislaciones nacionales y las normas de procedimiento para la concertación de acuerdos internacionales.

28. El establecimiento de la Comisión Intergubernamental de la ASEAN sobre Derechos Humanos y de la Comisión de la ASEAN para la Promoción y la Protección de los Derechos de las Mujeres y los Niños demuestra que la ASEAN es una organización centrada en las personas. En busca de una mayor estabilidad y seguridad en la región, la Asociación aplicará de inmediato las Directrices para la aplicación de la Declaración sobre la conducta de las partes en el Mar de China Meridional y comenzará a preparar los elementos para un código de conducta regional.

29. **El Sr. Salem** (Egipto) dice que mejorar el respeto por el estado de derecho en el plano internacional es fundamental para mantener la paz y la seguridad internacionales y promover la protección eficaz de los derechos humanos y libertades fundamentales, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Para

ello, la comunidad internacional debe intensificar sus esfuerzos en los ámbitos de la codificación, elaboración, promoción y aplicación de un marco internacional de normas y reglas sin discriminación, politización ni dobles raseros. La manifestación más clara de respeto del estado de derecho en el plano internacional será aprobar la solicitud de admisión de Palestina como Estado Miembro de las Naciones Unidas.

30. Es importante que las Naciones Unidas apoyen a los Estados Miembros en la mejora de su capacidad para respetar las obligaciones nacionales e internacionales contraídas en relación con el estado de derecho. Con ese fin, la Organización deberá mejorar la coordinación entre sus distintos órganos competentes para la ejecución de los programas de asistencia a la promoción del estado de derecho. Debe emplear un enfoque de conjunto al respecto, al tiempo que empodera a los gobiernos nacionales para que sigan su visión, programa y enfoque propios en la ejecución de esos programas. De hecho, la experiencia demuestra que el estado de derecho se fortalece cuando las reformas respetan los principios de inclusión, participación, transparencia e implicación nacional.

31. **El Sr. Ndao** (Senegal) dice que el respeto del estado de derecho es esencial para la paz, la justicia, la democracia, la buena gobernanza y el desarrollo armonioso y sostenible. Las Naciones Unidas deben prestar especial atención a la promoción del estado de derecho y la administración de justicia en situaciones de conflicto y posteriores a un conflicto.

32. En el ámbito de la justicia de transición, las medidas solamente serán eficaces si se basan en el respeto de los derechos y las necesidades de las víctimas y sus familiares. En este sentido, los tribunales especiales híbridos o internacionales podrán ejercer una función vital garantizando que los culpables rindan cuentas ante la justicia y que se respeten los derechos de las víctimas. Las comisiones de la verdad y la reconciliación también podrán ser de utilidad en el empeño por la reunificación nacional y el retorno a la paz duradera.

33. La experiencia en la consolidación de la paz ha mostrado que los países suelen salir de un conflicto con pocos recursos o instituciones intactos, lo que intensifica el problema de restaurar el estado de derecho. Por consiguiente, es esencial la asistencia internacional para ayudar a que los países en

situaciones posteriores a un conflicto restauren el sistema judicial, entre otras instituciones. No obstante, pese a los grandes progresos logrados por la comunidad internacional para fortalecer el estado de derecho en los planos nacional e internacional, queda mucho por hacer en la promoción de la paz y la reconciliación en los países en situaciones posteriores a conflictos.

34. **La Sra. Gutzwiller** (Suiza) dice que su delegación se siente alentada por los ejemplos de cooperación operativa en el sistema de las Naciones Unidas para establecer el estado de derecho, especialmente en situaciones de fragilidad y posteriores a conflictos, pero considera necesario un enfoque más integral. En ese sentido, apoya las recomendaciones del informe del Secretario General (A/66/133) de ampliar el uso de la programación conjunta en el mantenimiento de la paz y en las misiones políticas especiales intensificando los esfuerzos encaminados a la evaluación, planificación y aplicación conjuntas desde el principio; y de mejorar la colaboración entre las entidades de las Naciones Unidas presentes en situaciones distintas de las misiones mediante la evaluación y planificación conjuntas en respuesta a las solicitudes de apoyo presentadas por los Estados Miembros.

35. Su delegación recibe con agrado la aprobación de la resolución que ha patrocinado, junto con la Argentina y Marruecos, en la que se solicita el nombramiento de un Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, así como la Declaración de la Red de Seguridad Humana sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

36. Considerando que los esfuerzos de las Naciones Unidas para promover la justicia de transición a veces son aleatorios e incluso incoherentes, su delegación recibe con satisfacción el próximo examen del Secretario General sobre el empoderamiento jurídico y la erradicación de la pobreza, así como la inclusión de las cuestiones de la impunidad y la justicia de transición en el Plan estratégico conjunto para 2012-2014. La Asamblea General deberá prestar especial atención a las conclusiones del Informe sobre el desarrollo mundial 2011: conflicto, seguridad y desarrollo del Banco Mundial durante el debate de alto nivel sobre la promoción del estado de derecho que celebrará en su sexagésimo séptimo período de

sesiones, debate que deberá incluir deliberaciones sobre el estado de derecho, la justicia de transición y la política de complementariedad.

37. **La Sra. Rodríguez-Pineda** (Guatemala), señala la atención sobre el párrafo 31 del informe del Secretario General (A/66/133) y dice que, en sus cuatro años de existencia, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha tenido sonados éxitos en sus ámbitos de atribuciones, que incluyen la persecución penal de casos paradigmáticos, la capacitación técnica y la promoción de legislación para perfeccionar la capacidad del Estado a enfrentarse a la impunidad.

38. La Comisión Internacional constituye un modelo de fortalecimiento institucional novedoso y efectivo que ha ayudado a profesionalizar las instituciones nacionales de Guatemala. No obstante, la contraparte fundamental de la Comisión, el Ministerio Público, debe fortalecerse y crear capacidad a fin de poder seguir investigando y sometiendo casos a la justicia más allá del mandato de la Comisión. Pese a la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera en 1996, las organizaciones clandestinas y los cuerpos ilegales de seguridad no solamente continúan operando en la impunidad, sino que han evolucionado hasta convertirse en estructuras de delincuencia organizada, logrando una simbiosis con grupos transnacionales de delincuencia organizada.

39. Guatemala entra en una nueva etapa tras confrontar los abusos sistemáticos de los derechos humanos ocurridos durante sus 36 años de conflicto armado. Los acuerdos de paz del país incluyeron elementos de justicia de transición, tales como la elaboración de una memoria histórica, reformas en instituciones clave, mecanismos de resarcimiento de las víctimas y otros programas educativos encaminados a la reconciliación nacional.

40. Guatemala ha aprendido de su experiencia con el conflicto armado que no se puede hacer *tabula rasa* ni simplemente exigir perdón; que el proceso de democratización es una condición previa para fortalecer el estado de derecho; y que no existe una sola definición para el concepto de justicia de transición.

41. **La Sra. Enersen** (Noruega) dice que las cuestiones del desarrollo y del estado de derecho están claramente interconectadas, porque los inversores siempre buscan mercados previsibles y seguros para

sus inversiones. Existe un acuerdo casi universal sobre la necesidad de luchar contra la impunidad de los delitos graves asegurando el enjuiciamiento de los culpables. El Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda son avances importantes al respecto. No existe una solución única para la justicia de transición, aunque todos los mecanismos de justicia han de contar con el apoyo, la confianza y la buena acogida de la población del Estado en cuestión.

42. Su delegación apoya los mecanismos oficiosos de justicia, como las comisiones de la verdad, solicitados por las víctimas y la población en general. También favorece la complementariedad de las instituciones nacionales e internacionales para velar por que el sistema internacional no se sobrecargue con casos que se pueden tratar en el plano nacional.

43. Por último, acoge con satisfacción la decisión del Consejo de Derechos Humanos de nombrar un Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, así como la decisión de la Asamblea General de convocar una reunión de alto nivel sobre la promoción del estado de derecho en su sexagésimo séptimo período de sesiones.

44. **El Sr. Wang Min** (China) dice que en un mundo cada vez más globalizado, la comunidad internacional debe facilitar la promoción del estado de derecho en los planos nacional e internacional, lo que permite una influencia mutua y la complementariedad.

45. Debe aplicarse una combinación de medidas jurídicas y de otro tipo para establecer mecanismos eficaces de gobernanza social y coordinación. Además, es necesario tener en cuenta las especificidades de cada Estado, al tiempo que se respetan los principios universales, y elegir sistemas legales y judiciales adecuados para las respectivas situaciones de los países en conflicto. Debe buscarse un equilibrio entre los planes a corto y a largo plazo para la promoción del estado de derecho en los países que salen de conflictos. Es importante identificar las prioridades de esos países y concentrarse en primer lugar en atender a las necesidades más importantes para ellos y sus pueblos. Al mismo tiempo, deben elaborarse planes a largo plazo con el fin de promover la reforma y creación de instituciones sobre el estado de derecho.

46. Debe proporcionarse asistencia internacional a los esfuerzos de reconstrucción basados en la implicación nacional, y deben utilizarse varios tipos de

recursos para promover eficazmente el estado de derecho. Es necesario alentar a los países que se encuentran en situaciones de conflicto a que movilicen recursos nacionales para la construcción nacional, en particular el establecimiento de un régimen de estado de derecho adecuado a su situación específica. Al mismo tiempo, la comunidad internacional debe prestar asistencia en ámbitos como las finanzas, la infraestructura y la capacitación, de conformidad con las prioridades de los países que salen de conflictos, a fin de ayudarlos a crear capacidad. Las Naciones Unidas deben desempeñar un papel rector en la coordinación del apoyo internacional.

47. **La Sra. Mwaipopo** (República Unida de Tanzania) dice que las Naciones Unidas tienen un papel importante que desempeñar en la aplicación del derecho internacional para la solución pacífica de las controversias y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. La Organización proporciona, además, un foro para el diálogo constructivo sobre la aplicación de los instrumentos jurídicos para mantener el estado de derecho, lo cual es esencial para la estabilización de los países y las sociedades una vez terminados los conflictos.

48. Su Gobierno considera de gran importancia que los Estados asuman la responsabilidad que les incumbe de enjuiciar a los autores de violaciones graves del derecho internacional humanitario en situaciones de conflicto y postconflicto. Se ha comprometido a apoyar a la Corte Penal Internacional y encomia la labor de otros tribunales penales internacionales, que han ayudado a reforzar de modo sustancial el estado de derecho. Refiriéndose a la Comisión de Consolidación de la Paz, hace hincapié en que, durante el proceso de apoyo a la justicia de transición en los países que salen de conflictos, es importante enjuiciar a los perpetradores y construir los cimientos de sociedades pacíficas, estables y democráticas basadas en el estado de derecho.

49. **El Sr. Tladi** (Sudáfrica) dice que su Gobierno se esfuerza por promover el estado de derecho, incluso mediante acuerdos bilaterales y trilaterales destinados a ayudar a otros países a lograr la paz. Hasta el momento, la comunidad internacional ha centrado gran parte de su atención en el estado de derecho a nivel nacional; sin embargo, es crucial prestar la misma atención al estado de derecho a nivel internacional. Por otra parte, la promoción del estado de derecho a nivel internacional no se relaciona solamente con el número

de instrumentos internacionales aprobados, ratificados o incluso aplicados; también se relaciona con el contenido normativo del derecho internacional.

50. Los Estados Miembros deben defender la independencia e imparcialidad de las Naciones Unidas, y la Organización nunca debe tomar partido en un conflicto, sino mantener su imparcialidad. A este respecto, es importante evaluar el grado en que la Organización exige a sus órganos, en particular el Consejo de Seguridad, rendición de cuentas por el respeto de sus valores fundamentales y asegura la representación equitativa de todos sus Miembros.

51. El recurso a la Corte Internacional de Justicia como órgano judicial principal de las Naciones Unidas mitigaría las preocupaciones por el hecho de que las resoluciones no se estén aplicando plenamente o porque las medidas de aplicación exceden los límites permisibles del derecho internacional. Por otra parte, mediante cualesquiera argumentos que puedan invocarse en defensa de tales acciones, se estarían promoviendo los principios de la democracia deliberativa y la cultura de la justificación, ambos, elementos esenciales del estado de derecho.

52. En cuanto a la solicitud presentada por Palestina para ser admitida en las Naciones Unidas, dice que la imparcialidad con que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad trataron la solicitud tendrá un impacto significativo en el estado de derecho dentro de la Organización. Los criterios de admisión enumerados en el Artículo 4 de la Carta son los únicos que deben tenerse en cuenta, según lo confirmado por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva de 28 de mayo de 1948. La decisión de no admitir como miembro a Palestina sobre la base de cualquier condición que no esté expresamente prevista en el párrafo 1 del Artículo 4 de la Carta podría indicar una vulneración del estado de derecho.

53. Otro elemento esencial de la democracia deliberativa es la igualdad de todos, incluso a través de una representación equitativa. La configuración actual del Consejo de Seguridad, que no incluye a ninguno de los Estados de África o del África Meridional en la categoría de miembros permanentes, contradice totalmente ese principio. Su delegación, por tanto, seguirá bregando por la pronta reforma del Consejo de Seguridad, incluida la ampliación de ambas categorías de miembros.

54. Encomia la labor de la Asamblea General como ejemplo de democracia deliberativa y la labor de la Corte Penal Internacional, que desempeña un papel importante en la promoción del estado de derecho, haciendo que los responsables de la comisión de los delitos internacionales más graves rindan cuentas de sus actos.

55. **El Sr. Barriga** (Liechtenstein) dice que las actividades descritas en el informe del Secretario General (A/66/133) ilustran la contribución potencial de la comunidad internacional al fortalecimiento del estado de derecho en los planos nacional e internacional. Su Gobierno apoya firmemente al Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho y a la Dependencia de Asistencia sobre el Estado de Derecho en sus esfuerzos para coordinar esas actividades y proporcionar así una valiosa orientación de fondo al sistema de las Naciones Unidas.

56. La comunidad internacional ha hecho enormes progresos en el fortalecimiento del estado de derecho, en particular mediante la labor de la Corte Penal Internacional y otros tribunales internacionales, así como de las misiones de determinación de hechos y las comisiones de investigación. Sin embargo, hay límites, tanto de jurisdicción como prácticos, a los efectos que pueden tener los mecanismos internacionales. Por tanto, debe prestarse una mayor atención a mejorar la capacidad de los distintos Estados para administrar justicia en relación con delitos relacionados con conflictos. Además, estos esfuerzos no deben limitarse a situaciones de conflicto o postconflicto.

57. Al tiempo que señala con satisfacción que las Naciones Unidas han ayudado a varios países a fortalecer su capacidad judicial para hacer frente a los delitos relacionados con conflictos, expresa su preocupación por la falta de un centro de coordinación y apoyo claro para la creación de ese tipo de capacidad. Su delegación pide al Secretario General que designe a una entidad de las Naciones Unidas para que se encargue del fortalecimiento de los sistemas nacionales de justicia penal, a fin de que puedan hacer frente a los delitos más graves y complejos. El requisito de creación de capacidad no necesariamente tiene que concentrarse en delitos específicos, sino que debe abordar la capacidad de las autoridades nacionales para hacer frente a todos los aspectos de los complejos procesos penales y las investigaciones de causas de gran notoriedad. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sería la más adecuada para

cumplir esa función, en consonancia con su mandato original de promover sistemas de justicia imparciales y humanos.

58. El compromiso con el estado de derecho no es solo una cuestión técnica, sino que requiere apoyo político al más alto nivel. Al respecto, espera con interés la reunión de alto nivel sobre el estado de derecho que se celebrará en el sexagésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General, como una oportunidad para dar un impulso al apoyo político a los programas de asistencia sobre el estado de derecho desde la perspectiva de los donantes y los receptores.

59. Su Gobierno está muy interesado en la propuesta del Secretario General de crear un foro normativo internacional incluyente sobre el estado de derecho con miras a resolver la falta de coordinación general entre los actores nacionales e internacionales pertinentes, como se indica en el informe del Secretario General, y conviene en que las Naciones Unidas serían la entidad más adecuada para acoger ese foro. Sería útil, sin embargo, recibir mayor información sobre esa iniciativa, preferiblemente bastante antes de la reunión de alto nivel. De hecho, la creación de un foro de ese tipo podría considerarse como uno de los posibles resultados importantes de la reunión.

60. Ha llegado el momento de hacer una evaluación crítica de la eficacia del Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho. Aunque el Grupo ha tenido éxito en el suministro de orientación sustantiva sobre una serie de cuestiones, la eficacia del Grupo en su tarea fundamental, a saber, la de coordinar las actividades sobre el estado de derecho con el sistema de las Naciones Unidas, es menos claro. Su delegación desearía, por tanto, mayor información y análisis de la Secretaría en la preparación de la reunión de alto nivel.

61. **El Sr. Adi** (República Árabe Siria) dice que el debate actual es sumamente importante, pues coincide con la necesidad de realzar los principios y propósitos de las Naciones Unidas en la medida en que el Consejo de Seguridad sigue interfiriendo con el mandato de la Asamblea General, menoscabando así el estado de derecho a nivel internacional y vulnerando los mecanismos de aplicación de la Carta. La Asamblea General ha hecho hincapié en la necesidad de respetar el estado de derecho, tanto a nivel internacional como nacional, dada la proliferación alarmante de actos que entrañan el uso o amenaza del uso de la fuerza, la

ocupación de Estados soberanos o sus territorios, y una serie de nuevos artilugios conceptuales como la guerra preventiva, la soberanía relativa, la responsabilidad de proteger y la vinculación de la seguridad, el desarrollo y la democracia con los derechos humanos. A este respecto, las medidas unilaterales han tenido un impacto negativo en el estado de derecho a nivel internacional y en las relaciones internacionales.

62. Todos los Estados están obligados a respetar y aplicar los principios del derecho internacional, sin selectividad. La soberanía y la independencia de los Estados también deben respetarse, junto con el derecho de los pueblos bajo ocupación a luchar por la autodeterminación, la independencia y la liberación. Otros principios que su país apoya son la solución de controversias por medios pacíficos, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y el respeto de los derechos iguales de todos, sin distinción.

63. En el ámbito de las relaciones internacionales, el estado de derecho todavía está lejos de ser una realidad, debido a continuas excepciones a la regla, el criterio del doble rasero y la imposición de la voluntad de los fuertes a los débiles, que se derivan de la ausencia de medidas de disuasión eficaces y el tratamiento desigual de los Estados.

64. Desde el inicio de los lamentables y trágicos sucesos en la República Árabe Siria, el Presidente Bashar Al-Assad respondió con rapidez a las demandas legítimas del pueblo anunciando un programa global de reformas, que el nuevo Gobierno ha comenzado a implementar. El objetivo es fomentar la construcción de una democracia nacional y el pluralismo político, aumentar la participación de los ciudadanos, promover los derechos humanos, consolidar la unidad nacional y mantener el orden público y la seguridad. Sin lugar a dudas se han hecho reformas genuinas y tangibles sobre el terreno. El país ha aprobado una ley que sienta las bases de la política multipartidista, una ley electoral general que garantiza elecciones libres y justas bajo la plena supervisión judicial, una ley sobre el gobierno local, que pone la responsabilidad y la supervisión en manos del pueblo, una ley que regula el derecho de manifestación pacífica, y una ley que garantiza la libertad y la independencia de los medios de comunicación. Un diálogo nacional ha comenzado a nivel provincial con el fin de elaborar una visión para el futuro. Se formará un comité nacional para que estudie la posibilidad de modificar la Constitución. Sin embargo, algunas partes no han tenido ningún reparo

en injerirse ilegalmente en los asuntos internos del país con el fin de interrumpir el proceso.

65. El estado de derecho a nivel nacional asume una variedad de formas en función de las características políticas, históricas y culturales específicas de los distintos Estados. Deben elaborarse métodos para la prestación de asistencia técnica y financiera teniendo presentes esas características y no convirtiéndolas en un instrumento de presión política o un pretexto para injerirse en los asuntos de los Estados o menoscabar su soberanía. El estado de derecho, además, se vincula con los derechos humanos y la democracia. Cada uno de esos elementos, por tanto, debe aplicarse y reforzarse de manera equilibrada, y cada Estado debe cumplir las obligaciones que le incumben en la promoción y protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

66. **El Sr. Wada** (Japón) dice que su delegación acoge con satisfacción el informe del Secretario General sobre el estado de derecho, que sirve de base para la solución pacífica de controversias y es esencial para el mantenimiento de la paz y la estabilidad. Además, apoya la labor del Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho y de la Dependencia sobre el Estado de Derecho, al tiempo que espera con interés mayores esfuerzos de coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas para evitar la duplicación y crear sinergias efectivas.

67. Los tribunales internacionales desempeñan un papel importante en el fortalecimiento del estado de derecho. El Japón ha aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia y apoya activamente a la Corte Penal Internacional a través del financiamiento y aportando magistrados. La universalidad de la Corte Penal Internacional es de gran importancia y da la bienvenida a los países que se han adherido recientemente al Estatuto de Roma.

68. El papel de la Comisión de Derecho Internacional en la esfera de la codificación del derecho internacional y el desarrollo progresivo del derecho internacional no puede sobreestimarse. El Japón insta a otros Estados Miembros a que ratifiquen los tratados de codificación establecidos sobre la base de la labor de la Comisión.

69. La mera creación de leyes no es suficiente para que la ley esté completa o para asegurarse de que funcione de forma autónoma. Deben examinarse continuamente nuevas formas en que la ley pueda

mejorar el bienestar de los ciudadanos. Los marcos regionales han desempeñado un papel importante en la promoción del estado de derecho internacional. El Japón está dispuesto a proporcionar asistencia técnica para el establecimiento del estado de derecho en los países en desarrollo del Asia Sudoriental y otras regiones. Por último, el Japón encomia a la Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas por su papel esencial en la promoción del conocimiento y la difusión del derecho internacional.

70. **El Sr. Ruiz** (Colombia) dice que su Gobierno ha llevado a cabo varias iniciativas relacionadas con la justicia de transición, incluida la aprobación de la Ley de Justicia y Paz y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La primera de esas leyes, aprobada por el Congreso de Colombia en 2005, tenía por objeto resolver la situación jurídica de los combatientes de un grupo armado ilegal —las Autodefensas Unidas de Colombia— que fueron desmovilizados a través de un proceso de diálogo y negociación dirigido por el Gobierno. Por primera vez en la historia, un grupo armado ilegal se ha desmovilizado sin que mediara un proceso de amnistía y aplicando cabalmente las normas internacionales de la verdad, la justicia y la reparación. La ley prevé procesamientos penales y la imposición de penas principales y penas alternativas para los responsables de hechos violentos y delitos relacionados con el conflicto, así como un mecanismo para compensar a las víctimas con recursos del Estado.

71. La aplicación de mecanismos de justicia de transición se llevó a cabo en una escala sin precedentes. Afortunadamente, se recibió asistencia de las instituciones internacionales desde el principio, incluso de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En abril de 2011, la Misión Permanente de Colombia presentó al Consejo Permanente de la OEA un informe en el que se hace un balance objetivo del proceso desde su inicio. Según el informe, uno de los mayores impactos de la desmovilización ha sido la desaparición de los grupos armados ilegales como realidad política.

72. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se aprobó en junio de 2011 sobre la base de la convicción del Gobierno de que los colombianos deben aprender a superar la violencia que han vivido y construir una sociedad reconciliada y progresista. En concreto, la ley cancela los títulos fraudulentos obtenidos por la violencia y devuelve las tierras a sus verdaderos propietarios. También pide asistencia y reparación

integral para las víctimas del conflicto armado interno, en particular las comunidades indígenas y afrocolombianas. Aunque el desafío es enorme, pues hay unos cuatro millones de víctimas de la violencia, la sociedad y las instituciones colombianas están dispuestas a hacer todo lo necesario para implementar las ambiciosas medidas. Hace un llamamiento a la comunidad internacional para que acompañe a su Gobierno en ese proceso.

73. **La Sra. DeRosa** (Estados Unidos de América) dice que su delegación espera con interés la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el estado de derecho en los planos nacional e internacional en el próximo período de sesiones de la Asamblea como una oportunidad para hacer un balance de los avances y los desafíos pendientes en relación con el estado de derecho.

74. Su Gobierno apoya los objetivos del Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho y cree que el mejoramiento de la capacidad de la Organización en materia de estado de derecho debe estar estrechamente vinculado con el proceso que se está llevando a cabo de seguimiento y ejecución de la revisión independiente de la capacidad civil después de los conflictos. Los Estados Unidos conceden gran importancia a la función del derecho y la justicia de transición; en consecuencia, siguen ejecutando una serie de programas de asistencia conexos en los que participan la policía civil, la infraestructura jurídica y los sistemas judiciales. Este tipo de programas ayuda a los países a desarrollar sus propias capacidades para la protección y la rendición de cuentas y para combatir la impunidad.

75. El estado de derecho y el sector de la justicia son cruciales para la recuperación después de un conflicto. Su Gobierno acoge con satisfacción el hecho de que el Secretario General haya centrado su informe en varios problemas críticos, en particular el logro de resultados rápidos y tangibles, la elaboración de enfoques sectoriales para mejorar la coordinación del apoyo financiero y técnico, y el fomento de la identificación nacional con los proyectos. Una clave para lograr esto último es enviar personas muy competentes al terreno para que participen en los proyectos, de modo que ayuden a fomentar la confianza.

76. La labor de las Naciones Unidas y otras organizaciones para apoyar los procesos de justicia de transición merece el respaldo de la comunidad

internacional. Las comunidades afectadas, sin embargo, deben aprender a hacer frente a los retos; la participación de la sociedad civil en ese proceso es crucial.

77. En los últimos años, los esfuerzos de su Gobierno se centraron en la integración de la justicia a nivel nacional en situaciones de conflicto y postconflicto y en la justicia a nivel internacional. El fortalecimiento del estado de derecho a nivel nacional ayuda a reducir la necesidad de que los organismos internacionales intervengan. Para lograr la rendición de cuentas a nivel nacional, por otra parte, los países deben desarrollar la capacidad necesaria para investigar los delitos más graves y proteger a los funcionarios judiciales, las víctimas y los testigos de dichas causas.

78. Hay casos en que la justicia y la rendición de cuentas solo pueden lograrse con la contribución de la comunidad internacional. En consecuencia, su Gobierno apoya la labor que realizan varios tribunales internacionales en materia de justicia de transición. De conformidad con la posición de los Estados Unidos, que no son parte en el Estatuto de Roma, su Gobierno seguirá apoyando la labor de la Corte Penal Internacional en esta esfera y en otras.

79. **El Sr. Kapambwe** (Zambia) acoge con beneplácito el informe del Secretario General (A/66/133) y señala con satisfacción que las Naciones Unidas prestan asistencia en relación con el estado de derecho a más de 150 Estados Miembros de todas las regiones del mundo.

80. A nivel nacional, el Gobierno de Zambia está elaborando un programa para garantizar el acceso a la justicia de todos, en particular los más desfavorecidos. Entre las medidas concretas se encuentran la construcción de oficinas de asistencia jurídica, la provisión de una adecuada asistencia letrada y el reciente establecimiento de un juzgado de paz. En un esfuerzo por prevenir la violencia doméstica y promover el respeto de los derechos humanos, el Gobierno ha promulgado la Ley contra la violencia de género. Además, en septiembre de 2011 se celebraron elecciones presidenciales y legislativas y los observadores internacionales las declararon libres y justas. El cambio pacífico de gobierno ha demostrado la consolidación de la democracia en Zambia y su compromiso con el principio consagrado en el Acta Constitutiva de la Unión Africana, según el cual es inaceptable cambiar gobiernos por medios

inconstitucionales. Espera que el mismo principio sea aprobado por las Naciones Unidas en su debido momento.

81. A nivel internacional, su Gobierno ha participado activamente en la promoción del estado de derecho aportando contingentes y otro personal para hacer frente a situaciones de conflicto y postconflicto en todo el mundo, además de formar parte de órganos de derechos humanos y contribuir al proceso de presentación de informes por los Estados partes en cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la materialización del estado de derecho sigue siendo un desafío, especialmente para los países en desarrollo, debido a la escasez de recursos para apoyar a las instituciones y los mecanismos pertinentes. Por tanto, insta a la comunidad internacional a que preste asistencia técnica y cree capacidad para fortalecer las instituciones encargadas de promover, desarrollar y poner en práctica el estado de derecho.

82. **El Sr. Al-Shuraim** (Kuwait) dice que su Gobierno concede gran importancia a la consolidación del estado de derecho en los planos nacional e internacional. A este respecto, acoge con beneplácito el informe del Secretario General y reafirma la necesidad de adoptar medidas para garantizar el disfrute de la paz y la seguridad internacionales. Además, pide que se protejan los derechos humanos y las libertades fundamentales del individuo, así como el derecho de los pueblos a la libre determinación.

83. A nivel nacional, la democracia constitucional de Kuwait garantiza los derechos de todos los kuwaitíes y contribuye así a que se respete el estado de derecho, particularmente con respecto a la separación de poderes. Su Gobierno apoya los esfuerzos de las Naciones Unidas para ayudar a los Estados Miembros a elaborar y aplicar una constitución nacional, que es un elemento importante en las transiciones pacíficas. Tal es el caso en situaciones de gran cambio político, como las que están teniendo lugar en Oriente Medio o África del Norte, donde la reforma constitucional se ha convertido en una prioridad para los Estados interesados.

84. El Gobierno de Kuwait sigue tomando medidas para hacer frente a la situación de las personas que viven ilegalmente en el territorio de Kuwait, incluso mediante la creación, en 2010, de un nuevo mecanismo que ha conducido a la preparación de resoluciones

relativas a los residentes ilegales y a una serie de medidas ejecutivas para regularizar su situación.

85. A nivel internacional, su Gobierno respeta los tratados y las leyes pertinentes con miras a contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad mundiales y está comprometido con el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, por lo que denuncia los intentos de algunos Estados de inmiscuirse en la soberanía de otros Estados o en sus sistemas jurídicos o constitucionales mediante la amenaza o el uso de la fuerza, lo cual contraviene los principios de las Naciones Unidas enunciados en la Carta. Su Gobierno apoya la solución pacífica de controversias entre Estados.

86. El conflicto palestino-israelí es la más seria amenaza a la paz y la seguridad en Oriente Medio. Las Naciones Unidas no han logrado dar solución al problema, lo que a su vez ha permitido a Israel seguir ignorando el derecho internacional con total impunidad. Los autores de actos que contravienen el derecho internacional deben rendir cuentas con miras a consolidar el estado de derecho y su aplicación a todos por igual. Su Gobierno apoya plenamente la solicitud de Palestina para formar parte de las Naciones Unidas.

87. **El Sr. Htut** (Myanmar) acoge con beneplácito el informe del Secretario General (A/66/133) y observa con satisfacción los progresos realizados por el Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho en el fortalecimiento de la coordinación estratégica de todo el sistema y la coherencia de las actividades de las Naciones Unidas para promover el estado de derecho. Estas actividades deben seguir llevándose a cabo a nivel nacional e internacional de manera complementaria. La Organización y, en particular, la Comisión de Derecho Internacional, tienen un papel central en la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional.

88. La incorporación de tratados internacionales y regionales en los sistemas jurídicos nacionales de los Estados sigue siendo un gran desafío. La comunidad internacional puede facilitar ese proceso, especialmente en los países en desarrollo, mediante la creación de capacidad y la prestación de asistencia técnica a petición de los gobiernos receptores interesados, y fomentando la difusión más amplia del derecho internacional.

89. Reconociendo la primacía del derecho internacional consuetudinario y la obligación de los Estados de garantizar dentro de los límites de su competencia que la legislación nacional sea compatible con sus obligaciones

internacionales, su Gobierno está revisando actualmente su legislación nacional para ponerla en consonancia con las normas internacionales modernas, teniendo en cuenta al mismo tiempo la cultura y las tradiciones de la nación. El estado de derecho debe promoverse en la estricta observancia de la Carta de las Naciones Unidas; sin embargo, los principios consagrados en la Carta solo serán efectivos si todos los Estados cumplen las obligaciones internacionales derivadas de ella.

90. **El Sr. Maza Martelli** (El Salvador) dice que, si bien todos los Estados tienen el deber de respetar el estado de derecho, es a menudo un desafío para los Estados en situaciones de conflicto o postconflicto hacerlo con eficacia. Además, el estado de derecho no es una cuestión de mera legalidad, sino también de reconocimiento de la primacía de los valores esenciales de la justicia y la igualdad, lo cual debe conducir a la eliminación de prácticas y leyes arbitrarias. El derecho internacional desempeña un papel fundamental para potenciar el proceso de transición al proporcionar un marco jurídico idóneo, íntimamente relacionado con el respeto de los derechos humanos y la responsabilidad estatal.

91. En 1992, El Salvador puso fin a un período de 12 años de conflicto armado, cuya resolución se logró gracias al papel transcendental desempeñado por las Naciones Unidas. Para lograr los objetivos del proceso de transición, su Gobierno adoptó una serie de medidas jurídicas y administrativas encaminadas a fortalecer el estado de derecho, en particular la creación de la Comisión de la Verdad, la depuración de las fuerzas armadas y reformas institucionales. Además, en los últimos años se llevaron a cabo una serie de actos relacionados con la solicitud de perdón a las víctimas de la violencia, y el Estado ha reconocido expresamente su responsabilidad en ese contexto.

92. Su Gobierno, mediante la aplicación de la resolución 65/196 de la Asamblea General, se propone promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, y la importancia del derecho a la verdad y la justicia como obligaciones esenciales, particularmente en períodos de transición. Todas esas medidas han sido fundamentales para hacer avanzar el proceso de transición en El Salvador; sin embargo, es importante permitir que cada sociedad adopte las medidas de transición adecuadas a su propia situación.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.